

C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

**Vistos:**

Se sustituye en el motivo 25° el guarismo “80.000.000” por “100.000.000”; y se agrega en el considerando 26°, a continuación del vocablo “inflación”, la frase “suma que, además, devengará intereses legales, en caso de mora”.

**Y se tiene, además, presente:**

**PRIMERO.** Que se han traído los autos en relación para conocer del recurso de apelación deducido por el Fisco de Chile en contra de la sentencia dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó las excepciones de reparación del daño y de prescripción deducidas por la demandada; y acogió parcialmente la demanda deducida en autos, debiendo el Fisco pagar al demandante, don Luis Mauricio Redolés Bustos, la suma de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos), por concepto de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por daño moral, como víctima directa de torturas y vejámenes, suma que devengará reajustes desde que el fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo, sin imponer costas al Fisco de Chile.

A dicho recurso se adhirió la parte demandante, solicitando – sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que describe-se confirme la decisión de primer grado, elevando la suma ordenada pagar por concepto de daño moral a aquella indicada en la demanda, o la que este tribunal estime ajustada al mérito del proceso, con reajustes e intereses y costas.

**SEGUNDO.** Que los antecedentes del proceso que interesan al recurso en análisis, tanto los establecidos por el tribunal de primer grado como los que emanan de los elementos de convicción aportados y que no fueron controvertidos, son los siguientes:

1.- Que con fecha 10 de diciembre de 1973, el actor – a la sazón, de 20 años de edad y estudiante del primer año de la carrera de Derecho, de la Universidad de Chile, sede Valparaíso- fue detenido por funcionarios del Estado, siendo conducido a diversos recintos tanto militares como carcelarios, en los que fue sometido a una serie de malos tratos, torturas y apremios que minaron su salud física y mental, período de cautiverio que culminó en el mes de septiembre de 1975 cuando fue expulsado del país, en cumplimiento de una medida de



extrañamiento que sustituyó la condena a una pena privativa de libertad y de relegación que le fuera impuesta por un Consejo de Guerra.

2.- Que durante su privación de libertad el demandante transitó por recintos como la Academia de Guerra Naval, el Hospital Naval, Isla Riesco, Cuartel Almirante Silva Palma, Cárcel Pública y el Cuartel General de la Policía de Investigaciones.

3.- Que el actor vivió en el exilio hasta el año 1985.

4.- Que los padecimientos inferidos al demandante, atendida su entidad y la edad que registraba a la época de su ocurrencia, le provocaron traumatización extrema, que se traduce en una permanente emocionalidad de incertidumbre y terror sobre su situación, generando un cuadro de disfuncionalidad familiar grave que no sólo ha dejado huellas en su vida, sino también un daño transgeneracional, además de la alteración de su proyecto vital.

5.- Que, como consecuencia de lo anterior, el señor Redolés padece un trastorno de estrés post traumático de características patológicas, que se mantiene a la fecha; sin perjuicio de las secuelas permanentes que registra, como consecuencia de las torturas físicas sufridas.

6.- Que las conductas dañosas perpetradas por agentes de Estado en la persona del actor, constituyen delitos de lesa humanidad.

**TERCERO.** Que, para resolver lo propuesto por la vía del recurso de apelación deducido por el Fisco de Chile, resulta pertinente tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido ya a la obligación que tienen las autoridades estatales, específicamente el Poder Judicial, de observar los tratados que han sido ratificados por el Estado, teniendo en cuenta la jurisprudencia y doctrina de la Corte IDH como intérprete último de la Convención Americana, al señalar “124. *La Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sujetos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe hacer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos*



*Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”* (Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 16 de septiembre de 2006).

**CUARTO.** Que la citada carga que pesa sobre los Tribunales de Justicia ha sido sobradamente satisfecha por la sentencia de primera instancia que, razonadamente, se pronuncia sobre la obligación de reparación integral que pesa sobre el Estado, como fundamento para desechar la defensa relativa a la suficiencia de los actos de éste para indemnizar al demandante, atendido el carácter genérico de las medidas adoptadas, que no conllevan necesariamente la mitigación individual del afectado; además de constituir respuesta a los estándares mínimos de reparación fijados por las Naciones Unidas, pero que no quedan agotadas allí.

**QUINTO.** Que, por otra parte, esta Corte comparte el fundamento invocado por el *aquo* para desechar la prescripción de la acción civil alegada por el Fisco de Chile, realizando precisamente el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reclama la Corte IDH, de acuerdo al razonamiento de que dan cuenta los motivos 8° a 20°, otorgando primacía las segundas por aplicación del principio hermenéutico de favorabilidad, haciendo valer la interpretación más proclive a la vigencia de los Derechos Humanos, la que, en todo caso, se corresponde con la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho de la Convención Americana de Derechos Humanos en la materia (así, en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile”, de acuerdo a la sentencia de la Corte IDH de 29 de noviembre de 2018) y que es vinculante para esta judicatura, en cuanto parte del Estado, como consecuencia de la ratificación de la Convención y del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte IDH, en virtud de los actos soberanos que el Estado de Chile realizó, conforme sus procedimientos constitucionales.

**SEXTO.** Que, en efecto, en la citada sentencia de la Corte IDH, este tribunal internacional estableció la responsabilidad del Estado de Chile por el rechazo por parte de los tribunales de justicia nacionales, de acciones civiles intentadas por las víctimas de reparación de daños ocasionados por actos calificados como crímenes de lesa humanidad, con base en la aplicación de la figura de la prescripción, proceder que calificó como hecho ilícito y que fue reconocido como tal por el Estado



en la citada instancia. Al efecto, expresó la Corte IDH que el criterio esgrimido por el Consejo de Defensa del Estado en tribunales y que fuera acogido en la instancia civil correspondiente *“impidió que los tribunales analizaran en su mérito la posibilidad de determinar una indemnización por los daños y perjuicios morales ocasionados a las víctimas, restringiendo la posibilidad de obtener una reparación justa. Es decir, no hay duda de que en este caso las violaciones de derechos reconocidos en la Convención se produjeron por una serie de decisiones de órganos judiciales del Estado que impidieron a las víctimas acceder materialmente a la justicia para reclamar su derecho de obtener una reparación.*

*Sin embargo, la naturaleza de tales hechos ha llevado al Estado, con base en el cambio jurisprudencial de su máxima autoridad judicial, a reconocer ante este Tribunal que no es aplicable la prescripción civil a acciones que procuren reparaciones por daños y perjuicios ocasionados por este tipo de hechos.*

*En efecto, el Estado comparte el criterio de que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción y que no puede excusarse en el mero paso del tiempo...para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período 1973-1990, lo que incluye su arista indemnizatoria. En ese sentido, señaló que la jurisprudencia nacional ha integrado paulatinamente el derecho internacional de los derechos humanos al ordenamiento nacional, de modo tal que las modificaciones legales posteriores y la integración de los tratados internacionales en sus fallos han permeado la jurisprudencia del tribunal superior del país, que ha reconocido la admisibilidad de acciones judiciales civiles del tipo referido. Parte de este tránsito se explica con la incorporación, en el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, de una norma expresa que integra al ordenamiento jurídico los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, modificación que ha permitido a los tribunales de justicia dar aplicación sostenida a esta normativa.*

*En tal sentido, al hacer un recuento de la jurisprudencia de la Corte Suprema desde el año 2015, el Estado afirmó que la misma ha superado la dicotomía entre derecho interno y derecho externo, conjugando coherentemente ambas fuentes normativas a la luz de las obligaciones internacionales de derechos humanos. El Estado afirmó que lo anterior no obedece a un criterio aislado o a una decisión*



*fortuita, sino que actualmente se está frente a una posición robusta y consolidada que entiende que sobre el Estado pesan obligaciones internacionales y donde lo que debe primar es la obligación de reparar. (parágrafos 89, 90, 91, 92 y 93 de la sentencia citada.)*

**SÉPTIMO.** Que, en consecuencia, la decisión adoptada por el tribunal de primer grado resulta ajustada a derecho, por lo que la pretensión del Fisco de Chile no puede ser admitida, no sólo porque ella contraría lo libremente admitido por el Estado en sede internacional, de acuerdo a los fundamentos transcritos en el motivo que precede, sino porque implicaría hacerle incurrir, nuevamente, en responsabilidad internacional.

**OCTAVO.** Que, finalmente, este tribunal comparte los fundamentos invocados por el juez de primera instancia para determinar la procedencia del resarcimiento reclamado, estableciendo la existencia de padecimientos que deben ser indemnizados por constituir el daño moral que sustenta la demanda, sin perjuicio de considerar que resultan insuficientes, en concepto de esta Corte, los montos fijados para resarcir al actor, en atención a la extensión de los males causados por las torturas sufridas, cuyos efectos físicos y psicológicos sigue padeciendo en la actualidad; la duración del período de privación de libertad a sus cortos veinte años; la frustración del proyecto de vida ya iniciado al momento de la detención, con sus estudios universitarios truncados y el evidente dolor provocado por el exilio al cual debió partir, agravado por la prohibición del ingreso al territorio nacional, que recién se levantó en 1985, motivos por los cuales se aumentará prudencialmente el monto determinado por concepto de indemnización por daño moral, de la forma que se dirá.

**NOVENO.** Que la suma que se determinará en definitiva, devengará los reajustes indicados en la sentencia apelada, e intereses legales en caso de mora.

**DÉCIMO.** Que, en todo caso, no se impondrán costas a la defensa fiscal, en atención a que tal cometido ha sido impuesto por ley.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 6, 38 y 19 numerales 22 y 24

de la Constitución Política de la República y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma la sentencia apelada** de once de julio de dos mil veintidós, dictada en los autos Rol 10.983-2020 del 9° Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Redolés con Fisco de Chile”, con declaración de que se eleva la \$100.000.000- la suma que el Fisco deberá pagar al actor, a título de indemnización por daño



moral, la que devengará los reajustes otorgados por el fallo en alzada, y los intereses que se señalan en la presente sentencia.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción de la ministra Graciela Gómez Quitral.

N°Civil-11328-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral, e integrada, además, por la ministra señora Carolina Brengi Zunino y por el abogado integrante señor David Peralta Anabalón. No firma la ministra señora Brengi, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por ausencia.



Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Graciela Gomez Q. y Abogado Integrante David Peralta A. Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

